



1. Inserción solicitada por la señora diputada Abdala de Matarazzo

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

El consumo de drogas y el narcotráfico son un problema grave que nos afecta a todos como sociedad. Creo que es trascendental el tratamiento de estas leyes y que es positivo regular en materia de precursores químicos, ya que hace a una cuestión específica de una problemática que se compone de numerosas variables.

Respecto a esta cuestión puntual, tenemos dos factores o caminos: por un lado, los precursores salen del país disfrazados de otros productos y luego de su procesamiento vuelven en forma de cocaína o drogas sintéticas que son producidas a través de laboratorios instalados de forma clandestina en nuestro país.

Hay intereses enormes de por medio y considero sumamente positivo el proyecto que hoy se pone en cuestión, otorgando más herramientas para que el Estado regule y controle a las empresas y particulares que producen los precursores y se ponga sobre la lupa esta arista que compone el proceso de producción de drogas ilícitas.

Pero me parece importante remarcar que, si bien el control de los precursores es un fuerte componente para esta lucha, solo es uno de los frentes que debe abordarse para una lucha integral contra el narcotráfico.

Somos conscientes no solo de que este es un problema excluyente de nuestro país sino también de que el narcotráfico es un flagelo regional y mundial.

También sabemos que es central enfocarnos en cada uno de los ejes que componen el narcotráfico y que es fundamental avanzar sobre la producción, el transporte y el consumo. Tenemos que seguir dando herramientas a las fuerzas de seguridad y a la justicia, pero no tenemos que dejar de lado toda la problemática del consumo y los efectos que la droga genera en las familias y, sobre todo, en nuestros jóvenes.

Este Congreso ha hecho numerosos esfuerzos en avanzar en leyes modernas y en proyectos innovadores en este sentido. Así también ha habido fuertes esfuerzos por parte de las fuerzas de seguridad en atacar este problema, pero claramente siempre estamos un paso atrás de este flagelo. Pero debemos proponernos tomar la delantera y seguir trabajando en leyes como la que hoy estamos modificando.

Ya se ha repetido en numerosas oportunidades en este recinto que “la justicia lenta, no es justicia”.

En 2009, las Naciones Unidas emitieron un comunicado en el cual afirmaban que: “si bien las medidas de fiscalización legislativas y reglamentarias han prevenido en parte la desviación de precursores hacia canales ilícitos, esos productos químicos siguen llegando a los laboratorios clandestinos de fabricación de drogas.” Este comunicado, que es de hace



siete años, refleja de cierto modo lo que he hecho referencia anteriormente.

Tenemos que seguir trabajando en un diagnóstico conciso en el cual intervengan todos los eslabones, que van desde el Estado a la sociedad civil, para combatir este flagelo. Es preciso fomentar relaciones de trabajo coordinadas con el sector privado, así como fortalecer la cooperación nacional y regional.

Es clave que trabajemos mancomunadamente con otros países con los cuales compartimos fronteras, como así también con aquellos con los que hemos tenido antecedentes en materia de tráfico de estupefacientes y precursores químicos.

Desgraciadamente considero que el narcotráfico es un problema de larga data y de muy difícil resolución en el corto y mediano plazo; no obstante, tengo esperanzas de que el futuro podamos abordarlo de manera seria y efectiva. Para ello es clave que sigamos trabajando en la creación de nuevas e innovadoras herramientas que ayuden a controlar la oferta de drogas y que repercutan en la reducción sustancial de la demanda.

Por la Argentina que lucha por salir del flagelo del narcotráfico, por nuestros hijos y las generaciones venideras, para que puedan ver materializada esta lucha y sus resultados, acompañamos afirmativamente esta iniciativa.

2. Inserción solicitada por la señora diputada Estévez

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Para empezar, quisiera explicitar mi desacuerdo con la reforma de la ley 23.737, de estupefacientes, así como viene planteada, ya que si se sancionara con fuerza de ley implicaría un gravísimo retroceso en términos jurídicos. Aunque en principio podría acordar con la incorporación de los precursores químicos y el aumento de las penas, lo cierto es que la consecuencia de aprobar un proyecto así sería ratificar los aspectos que la Corte Suprema de Justicia ya ha dictaminado que son inconstitucionales. Esto tendría como consecuencia inmediata y directa una nueva embestida policial y judicial contra los usuarios, corriendo el foco nuevamente del real problema que es el narcotráfico y la salud. Quisiera creer que detrás de esta reforma no hay un intento encubierto del oficialismo por volver al pasado en la ley como ya se está volviendo al pasado en las políticas públicas. Prefiero asumir que se trata de propuestas de reformas parciales bien intencionadas. Lo más prudente sería dejar de lado los parches y concentrar los esfuerzos de este Congreso en debatir de cara a la sociedad un nuevo marco normativo sobre drogas. Esto por varias razones.



Primero, porque la legislación vigente sobre drogas, como he dicho, ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Segundo, porque su aplicación ha demostrado que no dio los resultados que se había propuesto, imponiéndose la necesidad de explorar otras alternativas más eficaces y eficientes en materia de lucha contra el narcotráfico. Tercero, porque cualquier debate sobre drogas que no tenga a la salud como eje central, esquiva el problema principal de toda esta cuestión: la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.

Vengo de una provincia que sabe muy bien cuáles son las nefastas consecuencias del narcotráfico. Actualmente, se encuentra en curso el juicio por la causa conocida como el “narcoescándalo” o de los “narcopolicías”, la cual viene mostrando cómo el tráfico de drogas ha permeado en las fuerzas de seguridad, el poder político y judicial y hasta en los medios de comunicación. Lo que es peor, este verdadero drama ha puesto en evidencia la capacidad de daño que puede llegar a tener el crimen organizado para la propia convivencia democrática.

Digo esto porque no es casual que la rebelión de la policía de mi provincia en el año 2013 se haya desatado poco tiempo después de que saliera a la luz este caso. Allí hubo un intento, por parte del oficialismo de mi provincia, por desligarse de toda esta cuestión y circunscribirla a un grupo pequeño de policías corruptos. Entonces, un sector corrupto y corporativizado de la policía hizo sentir su autonomía y poder acumulados durante décadas, de la dictadura a esta parte. No solo vaciaron las calles dejando de cumplir con su trabajo y su función social, sino que activamente organizaron a los jóvenes de los sectores populares, que cotidianamente son víctimas y carne de cañón del narcotráfico, para generar un escenario de caos.

Esta rebelión no quedó allí y comenzó a ampliarse hacia otras provincias, y durante unos dramáticos días se puso en jaque la propia institucionalidad democrática. La secuela social y cultural fue una fuerte sedimentación de los estigmas sociales hacia los jóvenes de los sectores populares por parte de los medios de comunicación y las capas medias y altas; así como un nuevo pacto entre el crimen organizado, los sectores corruptos de la policía y el poder político provincial.

Recuperados el orden y la seguridad, los medios de comunicación limitaron nuevamente esta catástrofe social a una causa judicial que cada vez se transforma más en un laberinto cuya salida parece inalcanzable. No sería la primera vez que gana la impunidad cuando se trata de narcotráfico. Pero lo que las cámaras no muestran y el Estado no aborda es la dramática situación sanitaria en materia de drogas que se vive en muchos de los barrios de nuestras ciudades y pueblos.

Durante los últimos años habíamos comenzado a avanzar fuertemente en un abordaje territorial de los consumos problemáticos acercando el Estado para atender, contener y proteger a nuestros jóvenes en situación de vulnerabilidad. Luego de muchos años y de mucho esfuerzo, y gracias a una firme decisión política por parte del gobierno anterior, la Sedronar dejó de ser una plataforma de lobby de la política de “guerra contra las drogas”



defendida por la DEA, para poner la salud como columna vertebral de sus políticas públicas.

Desde que asumió este gobierno, todos los centros y programas han visto reducidos sus presupuestos y muchos de sus trabajadores y trabajadoras han sido despedidos. Esto ha afectado muy fuertemente la presencia del Estado en las zonas vulnerables, alejando una vez más del sistema de salud y protección social a quienes más lo necesitan. Esto no es casual, pues se intenta restaurar una política cuyo eje sea la sanción del usuario en desmedro de la prevención y el tratamiento de los consumos problemáticos.

A esta situación se suman los crecientes reclamos por parte de las madres con hijos con padecimientos crónicos que necesitan de las propiedades del cannabis para curarse, reducir los daños y apaciguar el dolor. Madres que contra todos los prejuicios sociales e institucionales han puesto, como todas las madres lo hacemos, el interés y la salud de sus hijos por sobre cualquier otra cosa. Esas madres son las que, de aprobarse este proyecto, estarían nuevamente en peligro de ser perseguidas, reprimidas y sancionadas por amar y cuidar a sus hijos.

3. Inserción solicitada por la señora diputada Gallardo

Creación del Consejo Federal de Precusores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precusores Químicos.

Hoy estamos abordando la modificación de la ley 23.737 de estupefacientes, que regula penas al que produzca, fabrique, siembre, extraiga o prepare estupefacientes. El tema de precursores químicos y su desvío o la utilización ilegítima para la obtención de estupefacientes, ya se encuentra definido y regulado en la ley 26.045.

En este sentido fueron definidos como toda sustancia indispensable o necesaria para producir otra, mediante una reacción química; esto significa que constituyen una primera etapa en un proceso químico y actúan como sustrato en las etapas posteriores por lo que pueden ser utilizadas para la elaboración y obtención de estupefacientes.

Cuando hablamos de drogas, de estupefacientes o de drogas ilícitas tenemos una primera diferencia que marcar, por un lado están aquellas que son orgánicas como la marihuana y sus derivados, que no requieren de este tipo de componentes, y por el otro lado están aquellas otras drogas que denominadas “sintéticas” que son producto de mezclas que se hacen con estas sustancias químicas llamadas “precursores” propiamente dichos.

Nos encontramos con el uso habitual de precursores químicos por parte de ciertas industrias lícitas y se debe reconocer que esas sustancias son necesarias para la elaboración de medicamentos; pero por otro lado, la sofisticación de los métodos implementados por quienes las desvían con fines ilícitos también es una realidad. Desde el lugar que estamos



ocupando, debemos dar una mirada integral la problemática del narcotráfico y las adicciones ya que este tema tiene una relevancia que va más allá de lo estrictamente partidario, y es precisamente por eso que voy a acompañar en general este proyecto de modificación del Código Penal, porque considero que es necesario poner los recursos necesarios en la persecución y castigo efectivo a quienes se dedican al narcotráfico afectando la vida de miles de personas, y últimamente en mayor medida a jóvenes y hasta niños. Por otro lado, quiero dejar expresada mi oposición al artículo Primero del proyecto por los motivos que paso a manifestar:

No podemos dejar de lado la enorme cantidad de evidencias en torno a los beneficios medicinales del Cannabis. En la actualidad existen más de 37.000 estudios científicos publicados en relación al cannabis, cannabinoides o marihuana, según la Fundación DAYA de Chile, y teniendo en cuenta que la mayor parte de la evidencia se basa en estudios preclínicos (en células o en animales), son muy reducidos los casos en estudios clínicos (en humanos) debido a la prohibición que pesa sobre la marihuana. Hoy ya nadie puede poner en duda que la marihuana calma el dolor, controla los síntomas de enfermedades incurables y mejora la calidad de vida del día de muchos enfermos, lo que les permite afrontar con más dignidad las enfermedades que padecen; es por ello que estamos de acuerdo con que “el cannabis tiene un gran potencial terapéutico y/o medicinal que debe seguir siendo fortalecido con más y mejor evidencia” Aunque en la actualidad existe evidencia basada en el impacto social que ha producido la legalización del uso medicinal de cannabis en países de Europa, Canadá y algunos Estados de USA.

Alzheimer, cáncer, parkinson, enfermedades gastrointestinales, esquizofrenia, artrosis, VIH-Sida, epilepsia, glaucoma, fibromialgia, esclerosis múltiple son algunos ejemplos de enfermedades que actualmente se tratan con el aceite de cannabis medicinal obtenidos de manera casera por padres y pacientes, que han mejorado significativamente los síntomas y el cuadro que padecen, dándoles la posibilidad de un mejor desarrollo físico, cognitivo y emocional.

Hay muchas agrupaciones de madres y padres que reclaman la regulación del cannabis medicinal, hoy hay una demanda concreta de la sociedad que nos pide que no dejemos pasar más tiempo para que sea una realidad el uso legal de la marihuana como medicamento. En ese contexto y como miembro de la comisión de Salud estoy muy al tanto de esta problemática, he viajado recientemente a Chile con otros miembros de la comisión y nos hemos interiorizado en los beneficios de la administración del extracto de Cannabis en pacientes con serias patologías. Hay casos en los que niños han prescindido del uso de hasta 50 medicamentos (los cuales le traían muchísimos efectos secundarios) gracias al uso del aceite de cannabis.

En la forma en la que se encuentra redactado el artículo continuamos pensando a estos grupos de padres y madres que nos han venido a hablar a la Comisión y han expresado sus experiencias, y por el conocimiento que he adquirido en la temática es que entiendo que correspondería exceptuar el cannabis con fines de uso medicinal, pero este artículo no ha



distinguido y le ha dado el mismo rango que otras drogas, ordenando asimismo su destrucción, sin tener en cuenta todos los antecedentes de carácter medicinal y de salud. Es por eso que solo aceptare que se incluyan las modificaciones propuestas por la Diputada Gaillard en relación a este artículo.

5. Inserción solicitada por la señora diputada Rossi

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

La importancia de los precursores químicos dentro de la problemática del tráfico transnacional de estupefacientes se asienta en la circunstancia de que el proceso productivo de la mayoría de las drogas, ya sean de origen vegetal o sintético, requiere de estas sustancias químicas para transformarlas en el producto final.

Es importante entonces controlar estos químicos dado que sin ellos la fabricación de drogas ilícitas sería imposible. Por ello hace más de dos décadas que grupos de expertos señalan que la reglamentación estricta del comercio legítimo de precursores es un instrumento valiosísimo para evitar a los narcotraficantes el acceso a estas sustancias y así darles batalla.

En la Convención de Viena de 1988 sobre tráfico y sustancias psicotrópicas la comunidad internacional perfiló el tema de los químicos como uno de los pilares de la fiscalización internacional de drogas y se redactó un instrumento con medidas concretas relativas a la fabricación, distribución y comercio internacional de varias sustancias utilizadas en la preparación de drogas.

Nuestro país adhirió en su momento, pero con el tiempo fue olvidándose del tema, por conveniencia o ineficiencia. Cronológicamente, en 1996 se establece por decreto que el registro nacional de precursores químicos debía funcionar en la órbita de la Sedronar. En 2005 se sanciona la ley 26.045 que crea el registro nacional de precursores químicos, designando como autoridad de aplicación a la Sedronar. Esta ley no fue reglamentada, hecho señalado en reiteradas oportunidades por la OEA a través de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas, estableciendo que la autoridad de control no cuenta con la regulación que le permita cumplir su responsabilidad al respecto.

La falta absoluta del control del Estado permitió la importación por ejemplo de efedrina, pasando a niveles sospechosos la cantidad necesaria para su utilización en la industria farmacéutica. Cualquier otro país, en las mismas circunstancias, hubiera actuado rápidamente. Así fue que a Argentina se convirtió en exportador de efedrina, por ejemplo a México y además permitió consecuentemente, por el descontrol, la apertura de laboratorios clandestinos que preparaban metanfetaminas derivadas hacia otros lugares del mundo. Y no



solo eso, sino que se abrieron un sinfín de minilaboratorios elaboradores de drogas sintéticas que en los últimos tiempos han matado jóvenes en las conocidas fiestas electrónicas.

Entre los fundamentos del proyecto, la finalidad central es que “en el ordenamiento jurídico de la República Argentina se refleje la preocupación a nivel mundial en la búsqueda de contemplar en las legislaciones de todos los estados la penalización del desvío de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes”.

El plan "Argentina sin narcotráfico", presentado por el gobierno nacional, prevé, entre otras cosas, aumentar las penas para los vendedores de drogas, la recuperación de los bienes utilizados por los narcos, la identificación de bandas, la erradicación del paco con la detección de cocinas y la incorporación de tecnología en las fronteras del país, cosa con la que está de acuerdo toda la sociedad.

Como dije anteriormente, por conveniencia o por ineficiencia se hizo caso omiso a los indicadores que mostraban el agravamiento del problema, así como también a las generalizadas y desesperadas demandas sociales por salir de la indefensión. Ahora bien, esta iniciativa apuesta a constituirse en un efectivo punto de inflexión en materia de política de lucha contra el narcotráfico y las adicciones, siempre y cuando se plantee con este y otros planes poner en marcha acciones transformadoras.

Entre otras decisiones urgentes, se hace necesario un nuevo marco legal que permita crear bases jurídicas, institucionales y doctrinarias más modernas y eficientes para el desarrollo de políticas capaces de abordar los problemas en su integralidad.

En primer lugar, debe formar parte central de esta reformulación el abordaje de las nocivas consecuencias individuales y sociales que imponen el consumo creciente de drogas y el estratégico papel del Estado en materia de prevención, cuidado, tratamiento y reinserción social del adicto.

Esta ardua tarea implicará montar objetivos, estrategias, acciones compartidas y coordinadas entre la Nación, las provincias, los municipios y toda la sociedad.

El nuevo régimen normativo debe también implicar un cambio de paradigma para dar batalla a este flagelo. La nueva estructura político-jurídica debe ser tan amplia y precisa como realista y flexible.

Este proyecto sobre la modificación de la ley 23.737 prevé “penas de prisión e inhabilitación especial” a aquellas personas que, por cualquier medio, ingresen “en la zona de frontera o desvíen de los canales legales regulados por la normativa”, productos y sustancias químicas esenciales para la producción ilegal de estupefacientes.

Se prevé reprimir “con prisión e inhabilitación especial al que, por cualquier medio, ingresare en la zona de frontera delimitada por ley o desviare de los canales legales regulados por la normativa, precursores químicos o sustancias químicas esenciales para la producción ilegal de estupefacientes”; y si se tratare de una persona jurídica, “la sanciona con una pena de multa en pesos”.



La iniciativa también se ocupa de cuestiones probatorias y administrativas. Sobre dicha cuestión, establece que “el juez dispondrá la destrucción por la autoridad sanitaria nacional de los estupefacientes en infracción o de los elementos destinados a su elaboración, salvo que pertenecieran a un tercero no responsable o que pudieran ser aprovechados por la misma autoridad, dejando expresa constancia del uso a atribuirles.”

No obstante, el proyecto aclara que “previamente deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente”.

Y agrega: “se procederá al decomiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieran a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaran que no podía conocer tal empleo (...) se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por delito”.

La propuesta dispone que el Poder Ejecutivo nacional deberá “actualizar periódicamente listados de sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes”. Igualmente, deberá establecer que “tipo de mezclas que contengan en su formulación dichas sustancias químicas estarán sujetas a fiscalización”.

Se contempla la exigencia de “la fiscalización de mezclas, y no sólo la de precursores químicos”, un aspecto de suma importancia, ya que algunas mezclas contienen precursores químicos que son de fácil separación y, de esa forma, se adquiere la sustancia para ser desviada.

Por supuesto que todas aquellas medidas que persigan y combatan este negocio llamado por muchos el comercio de “la esclavitud y de la muerte cuenta con mi aprobación. Pero pediría el apoyo de todo el arco político para un debate serio y profundo de la utilización del cannabis con fines medicinales, comprometiéndose el gobierno a participar, escuchando el pedido de una parte de la sociedad.

6. Inserción solicitada por el señor diputado Santillán

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Con este proyecto estamos haciendo referencia a una reforma muy superficial. Consideramos que la intencionalidad del oficialismo es completamente distinta a la de modificar una ley que permita luchar verdaderamente contra el narcotráfico. Nosotros proponemos una modificación integral de la ley de estupefacientes para que se deje de perseguir a aquellos que realizan uso personal o usan estas sustancias para el tratamiento



medicinal de sus hijos.

Hoy estamos debatiendo un proyecto que modifica la ley 23.737, de estupefacientes, que data de 1989, muy obsoleta, ya que esta no considera tratamientos ni actualizaciones presupuestarias. Consideramos que el narcotráfico es un flagelo que sufren muchas partes del mundo y, como tal, debe ser tratado como un problema de salud.

La Argentina suscribió diversos tratados internacionales, y esos tratados establecen que los Estados debemos garantizar el derecho humano a la salud. Este es un derecho fundamental y, por lo tanto, obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos el acceso a los tratamientos. Hoy ese Estado niega ese tratamiento a través de una legislación obsoleta que ahora estamos modificando en lugar de hacernos cargo y de cambiar la realidad, receptando el pedido de estos miles de pacientes que hoy hacen uso del cannabis clandestinamente. La nueva ley de Salud Mental 26.657 en su artículo 4° pregona la igualdad de derechos frente a los servicios de salud de los usuarios de drogas legales e ilegales, un imposible en el marco de la ley de drogas vigente.

El nuevo Código Civil enfatiza, en armonía con la ley de Salud Mental, que “deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades”, pero esto no tiene posibilidad de implementación para los usuarios de drogas, que bajo la Ley 23.737, deben elegir entre cárcel y tratamiento; no obstante estas contradicciones hoy no contamos con una política oficial de reducción de daños que permita reducir problemas del consumo como las sobredosis ni con una ley que deje de castigar al usuario de drogas. Portugal, por ejemplo, ha sido pionero en un modelo en la escala de grises de la reforma de las políticas de drogas, más recientemente emulado en la región en Chile, Brasil y México, descriminalizando el uso personal y la tenencia para consumo de cualquier droga.

Nadie que posea lo que se considere menor a las dosis personales, correspondiente a diez días de consumo, puede ser sentenciado a la cárcel o involucrado en antecedentes delictivos. Así, las dosis mínimas que se entienden para consumo personal no están fijadas por una cantidad de sustancia (como en las leyes de Colombia, México o Perú). Según los estudios del instituto norteamericano Cato, la descriminalización produjo una reducción en las patologías asociadas al uso de drogas -lo que sus defensores argumentaban-.

En nuestro país en la provincia de Chubut se agregó en el Vademécum de las obras sociales el aceite de cannabis teniendo en cuenta casos testigos, y es por eso que consideramos que si queremos combatir el narcotráfico lo hagamos de otra manera; es decir, de manera integral y no condenando a consumidores o a las madres que pretenden un tratamiento para sus hijos.



8. Inserción solicitada por la señora diputada Terada

Creación del Consejo Federal de Precursores Químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.

Antes de referirme puntualmente al proyecto sobre precursores químicos, me gustaría poder hacer un poco de historia y traer algunos fragmentos del trabajo coordinado por la doctora Elisa Carrió y que contó con la participación de los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires Walter Martello, licenciada Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piani, Daniel Exposito, licenciado Sebastián Cinquerrui, el entonces legislador licenciado Fernando Sánchez y por el Centro de Investigación de la Coalición Cívica, la licenciada Paula Oliveto Lago y el diputado nacional Juan Carlos Morán. Dicho Trabajo se realizó en el 2009, donde entre otras cosas se denunciaba la proveniencia del dinero de campaña de la ex pareja presidencial.

El informe da cuenta en su Capítulo III, "Participación y complicidad estatal en el crecimiento y diversificación de la droga en la República Argentina-el rol de Aníbal Fernández", de lo siguiente: "Así como lo veníamos sosteniendo en otras oportunidades, el triple crimen de General Rodríguez y sus vinculaciones con el desvío de precursores químicos como la efedrina y la pseudoefedrina viene a confirmar lo que se venía denunciando en diversos informes realizados por organismos internacionales especializados en estos temas, en los cuales se establecía que nuestro país muestra una ausencia de políticas públicas eficaces en esta materia. En tal sentido, en el último informe elaborado en 2007 por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación efectuada dentro del denominado "Mecanismo de Evaluación Multilateral" (MEM) para el bienio 2005-2006 se "...reconoce el esfuerzo realizado por Argentina por mantener un mecanismo de control de sustancias químicas, pero observa con preocupación que la entidad nacional que ejerce el control no cuenta aún con una reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente sus responsabilidades. Tampoco cuenta con estadísticas que integren las incautaciones de sustancias químicas a nivel nacional, así como sobre la cantidad de sustancias desechadas".

Durante la visita de las autoridades del Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) a la reunión conjunta de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, el Subdirector del organismo resaltó la ausencia de un decreto que reglamente la Ley N° 26.045 que creó el Registro de Precursores Químicos, siendo la misma esencial para que la ley "sea operativa, dadas las particularidades el comercio -de precursores- en la Argentina". Cabe resaltar que dicha ley fue promulgada el 6 de julio de 2005, y habiendo pasado más de



tres años, la misma se encuentra sin ser reglamentada por el correspondiente decreto de la Presidencia de la Nación.

De igual modo, el Gobierno de los Estados Unidos advirtió a través de su embajador Earl Anthony Wayne su preocupación por el "rápido crecimiento del comercio ilegal de efedrina y otros precursores químicos".

Nada de esto fue tenido en cuenta por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aun cuando, según datos oficiales, en los últimos 3 años, llamativamente, se ha triplicado la importación y exportación de efedrina y pseudoefedrina por parte de la República Argentina. Tan sólo en 2008 ingresaron 52,4 toneladas, aunque se reconoce que sólo 10 son utilizadas por la industria farmacéutica. Se infiere que gran parte del excedente es destinado como precursor químico para la producción de drogas sintéticas. La cantidad de efedrina que importa la Argentina la convierte en el tercer importador mundial, muy por delante de países como Estados Unidos o Brasil.

Por otro lado, se evidencia una clara inconsistencia institucional, en donde los distintos organismos de la administración pública nacional no encuentran demarcadas sus competencias, lo que provoca que sus funcionarios se libren de toda responsabilidad por los incumplimientos de lo ordenado en la leyes vigentes, realizando acusaciones cruzadas en cuanto a la inoperancia en el accionar de otros organismos.

Son graves las afirmaciones realizadas por el entonces ministro de Justicia y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández en un reportaje publicado por el diario Clarín el 22 de agosto del corriente año, en el que manifestó que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) "no sabe nada de drogas". Incluso dijo que "SEDRONAR tiene el registro desde hace tres años de sustancias químicas de corte, como la efedrina. ¿Cuántas causas se originaron en ese tiempo por denuncias tuyas? Cero. Quiere decir que no hay ningún control. Nuestra preocupación es mayúscula, porque si la Argentina es elegida para la preparación de drogas, como se vio en lo de Maschwitz... La efedrina para nosotros es un tema muy preocupante, porque es uno de los posibles nichos a explotar por los narcos, por un montón de razones. Entre otras, porque no hay controles acabados de las sustancias".

Ante esto, corresponde sostener ¿cómo puede entenderse que un ministro de la Nación que se desempeña en su cargo hace más de cinco años manifieste que no existe ningún control sin tomar cartas en el asunto? Por otro lado, en la visita realizada al Senado de la Nación, el secretario de la SEDRONAR, doctor José Ramón Granero, denunció que "desde 2005 Fernández impide a los jefes de las fuerzas de seguridad concurrir a las reuniones de trabajo para coordinar las tareas de lucha contra el narcotráfico" y aseguró que el organismo a su cargo realizó "más de 20 denuncias penales por infracciones a la ley de estupefacientes en materia de precursores químicos. Que no haya sentencias condenatorias no significa que no haya denuncias penales".

En el mismo sentido vale la controversia entre lo expresado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña en alusión al control de las empresas farmacéuticas habilitadas para la



importación de algunos precursores químicos como la efedrina, y la inacción y dudosa relación de estas empresas vinculadas al narcotráfico con el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.

A esta altura es evidente que el legítimo debate sobre la despenalización del consumo de drogas, en vez de constituir un aspecto importante a analizar de la problemática, resulta en un eficaz distractivo de lo que el gobierno nacional no puede o no quiere hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, no son pocos los actores públicos que han manifestado gran preocupación debido al avance del narcotráfico en nuestro país, al punto de llegarse hablar de la existencia de un estado de "pre-cartelización", con experiencias similares a las vividas por países como Colombia o México.

Esta circunstancia ha sido advertida por un grupo de 80 jueces y magistrados nacionales, provinciales y federales que mediante un comunicado sostuvieron que la oferta y la demanda de drogas "registra niveles sin precedentes" en el país y que al perseguir a los consumidores "se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial" denunciando incluso que las bandas de narcotraficantes "en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial" y que "lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular".

En este sentido, destacan que "se ha podido verificar que la política vigente en materia de drogas no solamente no ha disminuido su tráfico ni consumo sino que por el contrario ambos siguen en alza", viéndose un "desplazamiento de políticas sociales de asistencia, prevención y atención de la marginalidad que ha generado una gran cantidad de muertos como producto de la ilegalidad y aumento de la delincuencia como consecuencia de la necesidad de adquirir drogas, agravándose la corrupción en las agencias estatales, no solamente en el control policial sino en todos los estamentos."

En el comunicado mencionado anteriormente, altos representantes de nuestro Poder Judicial sostuvieron que "con un eficaz despliegue del derecho administrativo y sus sanciones puede llegar a regularse todo lo concerniente al mercado de medicamentos, el ejercicio de las profesiones sanitarias, la prevención de que los centros de tratamiento de adictos no desplieguen técnicas violatorias de derechos humanos fundamentales, la prevención de la desviación del comercio de precursores y sustancias químicas para la elaboración de drogas y el control del lavado de activos provenientes de actividades criminales, quedando al derecho penal sólo los comportamientos intolerables para la pacífica convivencia social."

A mayor abundamiento, encontramos las trabas que el ministro Aníbal Fernández ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal. Conforme consta en la versión taquigráfica del Senado de la Nación, el entonces ministro del Interior, mediante



el envío de una nota, pretendió desalentar el tratamiento de la norma.

En ese orden se inscriben las manifestaciones obrantes de la senadora Escudero, cuando defendió el proyecto en el recinto, en las que denunció "falta de voluntad política para avanzar en el proyecto". Molesta por las trabas que había tenido el dictamen, Escudero criticó que se intente paralizar el proyecto "cuando se llenan la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico", en lo que pareció una alusión al ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández, que en esos días impulsaba la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.

A esta altura es evidente que el legítimo debate sobre la despenalización del consumo de drogas, en vez de constituir un aspecto importante a analizar de la problemática, resulta un eficaz distractivo de lo que el gobierno nacional no puede o no quiere hacer respecto de la lucha contra el narcotráfico.

Esta circunstancia en la que los organismos responsables de paliar estos problemas muestran una gran incapacidad en su accionar trae como resultado la instalación de carteles internacionales de la droga con profundo arraigo en la Argentina, con el correspondiente e inevitable aumento de los niveles de criminalidad y violencia que ejercen sobre la sociedad. Tal es así que la Auditoría General de la Nación en su informe sobre la SEDRONAR observa la ausencia de controles y de políticas públicas.

Así informa y describe las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias."

Así, en un amplio informe del que sólo referencio un capítulo, podemos recordar que en esta década pasada poco o nada se hizo para empezar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.

Hoy nos encontramos sumando una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico.

Como sabemos, la gran mayoría de las drogas, sean sintéticas o no, requieren de la utilización de precursores químicos para su proceso de producción. Entre otras, la modificación que estamos aprobando en el artículo 44 de ley 23.737, resulta necesaria para poder controlar el desvío y/o traslado de estas sustancias.

Lamentablemente, de un día para otro no vamos a dismantelar las cocinas que hoy tenemos en el país, producto de las migraciones que los grandes carteles hicieron de Estados Unidos a México y luego desde México hacia Argentina, pero sí vamos allanando el camino.

Hace dos días se incautaron 4.000 litros de precursores químicos, principalmente ácido clorhídrico; hace tres semanas se habían incautado 3.700, situación que no hace más que exponer la vulnerabilidad que hoy tenemos en materia de lucha contra el narcotráfico y mostrarnos una vez más que los asentamientos de los carteles en nuestro país responden a un mercado creciente, continuo, expandido, diversificado y altamente rentable, lo que nos lleva a replantearnos la estrategia combativa porque claramente hasta ahora se ha combatido muy poco y en cambio hemos abierto la tranquera de par en par permitiendo que se desarrolle un mercado minorista creciente, particularmente de cocaína y marihuana.



Honorable
Cámara de Diputados
de la Nación
REPÚBLICA ARGENTINA

Drogas que antes se producían en países vecinos e ingresaban al país por vía terrestre, fluvial o aérea, hoy se elaboran acá gracias a la protección policial, y por qué no política, a los crecientes grupos narcotraficantes, lo que les garantizó expandirse y estabilizar el mercado ilegal de drogas a lo largo y ancho del país y principalmente en las ciudades más dinámicas. Hemos dejado de ser un “país de tránsito” para convertirnos en un país productor de estupefacientes, situación que fue subestimada por los gobiernos anteriores... Tanto que el narcotráfico tiene barrio privado en la provincia de Buenos Aires.

La situación de la provincia del Chaco no es distinta; de hecho se han incrementado los casos de avionetas y vehículos aéreos que deben “descender de urgencia” en los campos de la zona. En su gran mayoría se deben a acuerdos con los arrendadores o dueños de los mismos como una suerte de parada estratégica para poder continuar hacia Buenos Aires o a Europa.

A esto tenemos que sumarle el grave problema por la falta de radares y controladores y la cercanía de la Triple Frontera, los pocos recursos destinados al control y prevención del narcotráfico y la falta de personal policial idóneo para la acción, los propios lugareños que ven en la infracción de la ley una posibilidad de ingreso efectivo, situación que ha quedado comprobado que se repite en todos los centros urbanos y rurales donde los carteles de narcotráfico se han instalado. Ante la imposibilidad de una fuente de trabajo real y permanente, los narcos aparecen como los grandes protectores de estas urbes, calando cada vez más profundo y generando vínculos perpetuos. Vínculos que hoy estamos viendo que se han hecho muy fuertes.

Vamos a acompañar los dos proyectos que vienen con sanción del Senado, porque queremos empezar a cambiar la Argentina, queremos un país donde los narcos se sientan incómodos y que no tengan posibilidad de negocio. Queremos ser el país que ejerce el control efectivo de los estupefacientes y confiamos que con este cambio que inició en diciembre del 2015 lo vamos a conseguir.